

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO VEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.  
SECCIÓN SEGUNDA**

AUTO INTERLOCUTORIO:	829
RADICACIÓN:	11001-33-35-027-2021-00083-00
MEDIO DE CONTROL:	EJECUTIVO SINGULAR
EJECUTANTE:	CONSUELO AMPARO PINILLA GUEVARA
EJECUTADA:	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
ASUNTO:	Desestima recurso reposición

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022).

Surtido el traslado de que trata el artículo 319 del Código General del Proceso (en adelante CGP), aplicable por remisión del artículo 242 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), se procede a resolver el recurso de reposición interpuesto por el apoderado de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP) contra el auto interlocutorio No. 311 del 30 de marzo de 2022, que libró el mandamiento ejecutivo.

La parte recurrente fundó su inconformidad en que mediante Resolución No. RDP 031479 del 4 de agosto de 2017 la UGPP dio cumplimiento a la sentencia objeto de ejecución y reajustó la pensión de vejez de la señora Consuelo Amparo Pinilla Guevara a \$1'876.681, ordenó el pago de las diferencias pensionales por la suma de \$24'350.557 y por concepto de intereses moratorios reconoció el valor de \$576.180,69, monto que no ha pagado por falta de disponibilidad presupuestal; acto administrativo modificado por la Resolución No. RDP 025628 del 28 de agosto de 2019; y como soporte de sus aseveraciones anexó la imagen del cupón de pago No. 207416 de octubre de 2017 y copia de dichas resoluciones.

Advirtió que el empleador de la señora Consuelo Amparo Pinilla Guevara no realizó los aportes sobre todos los factores salariales, por lo que le corresponde a la ejecutante iniciar el respectivo incidente de regulación y depuración de aportes que permita definir el valor que le hace falta y obtener el monto pensional al que tiene derecho, valores que deben actualizarse con la fórmula financiera aplicada por la jurisdicción contencioso administrativa.

Señaló que las cifras de la Resolución No. RDP 31479 del 4 de agosto de 2017 no son desproporcionadas, pues con ellas se asegura el cumplimiento del principio constitucional de la sostenibilidad financiera del Sistema General de Pensiones y se garantiza en debida forma la financiación de la pensión objeto de re-liquidación, y sostuvo que resulta lógico indexar los montos obtenidos porque, de lo contrario, al hacer el recobro de lo dejado de pagar a la fecha en que debió hacerse la cotización o el valor que correspondía para la fecha, no permitiría mantener el poder adquisitivo de las pensiones, por lo que es necesario hacer la actualización de acuerdo con el comportamiento de la cotización a pensión, tal como fue ordenado en la sentencia objeto de cumplimiento.

Indicó que los intereses moratorios se generan por el tardío cumplimiento de las condenas judiciales y se causan únicamente respecto de las cantidades líquidas causadas hasta la fecha de ejecutoria de la sentencia, de suerte que al no haberse solicitado el acatamiento

de la providencia objeto de ejecución dentro de los tres (3) meses siguientes, es decir, desde el 5 de mayo de 2017 hasta el 5 de agosto de 2017, cesaron los mismos, si se tiene en cuenta que la parte ejecutante no presentó la documentación completa en el mes anterior a la inclusión en nómina, motivo por el cual se le aplica la sanción prevista en el artículo 192, inciso 5, del CPACA (archivo “19RecursoReposiciónMandamientopago.pdf”).

En efecto, se recuerda que los artículos 299, inciso final, del CPACA, y 442, regla 3ª, del CGP, prevén: (i) los requisitos formales del título ejecutivo sólo podrán discutirse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago y, por ende, no se admitirá ninguna controversia sobre los requisitos del título que no haya sido planteada por medio de dicho recurso; (ii) los defectos formales del título ejecutivo podrán reconocerse o declararse por el juez de oficio en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecución, según fuere el caso; y (iii) los hechos que configuren excepciones previas deberán alegarse mediante recurso de reposición contra el mandamiento de pago.

Las exigencias formales y los requisitos sustanciales del título ejecutivo están regulados en los artículos 215 y 297 del CPACA y en los artículos 114 y 422 del CGP. Veamos:

*“Art. 215.- La regla prevista en el inciso anterior no se aplicará cuando se trate de títulos ejecutivos, caso en el cual los documentos que los contengan deberán cumplir los requisitos exigidos en la ley”.*

*“Art. 297.- Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

*1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias (...).”*

*“Art. 114.- (...) 2. Las copias de las providencias que se pretendan utilizar como título ejecutivo requerirán constancia de su ejecutoria”.*

*“Art. 422.- Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial (...).”*

El Consejo de Estado<sup>1</sup> hizo la distinción entre los requisitos sustanciales y formales del título ejecutivo, de la siguiente manera:

*“(...) La distinción entre las condiciones formales y materiales o sustantivas del título ha sido objeto de reiterados pronunciamientos de la Sección Tercera. En el auto del 31 de enero de 2008 -Exp. 34.201- sostuvo que las condiciones o requisitos formales del título ejecutivo consisten en el hecho de que el documento -si es uno simple, como el título valor- o los documentos -si se trata de uno complejo- sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por una autoridad judicial, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado -aun cuando esta fuente no está prevista expresamente en el artículo 488 del CPC-, o de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva. Por su parte las condiciones o exigencias sustantivas se circunscriben a las señaladas antes: exigibilidad, claridad y expresividad:*

*‘Reiteradamente, la jurisprudencia ha señalado que los títulos ejecutivos deben gozar de ciertas condiciones formales y sustantivas esenciales. Las formales consisten en que el documento o conjunto de documentos que dan cuenta de la existencia de la obligación sean auténticos y emanen del deudor o de su causante, de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción, de un acto administrativo debidamente ejecutoriado o de otra providencia judicial que tuviere fuerza ejecutiva conforme a la ley.*

*Las condiciones sustanciales se traducen en que las obligaciones que se acrediten a favor del ejecutante o de su causante y a cargo del ejecutado o del causante, sean claras, expresas y exigibles. Frente a estas calificaciones, ha señalado la doctrina, que*

<sup>1</sup> Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Tercera, sentencia de mayo 14 de 2014 Rad.: 25000-23-26-000-1999-02657-02 (33.586) C.P: Enrique Gil Botero. Ver también la sentencia del 8 de junio de 2016, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa, radicación número: 27001-23-31-000-2012-00086-01(47539).

*por expresa debe entenderse cuando aparece manifiesta de la redacción misma del título. En el documento que la contiene debe ser nítido el crédito-deuda que allí aparece; tiene que estar expresamente declarada, sin que haya para ello que acudir a lucubraciones o suposiciones. 'Faltará este requisito cuando se pretenda deducir la obligación por razonamientos lógico-jurídicos, considerándola una consecuencia implícita o una interpretación personal indirecta'. La obligación es clara cuando además de expresa aparece determinada en el título; debe ser fácilmente inteligible y entenderse en un solo sentido. La obligación es exigible cuando puede demandarse el cumplimiento de la misma por no estar pendiente de un plazo o condición (...)'".*

En cuanto a las excepciones de mérito que proceden frente a una sentencia de condena que sirve de título ejecutivo, es pertinente indicar que están enlistadas en el artículo 442 del CGP. Obsérvese:

*"Art. 442.- La formulación de excepciones se someterá a las siguientes reglas:*

*(...) 2. Cuando se trate del cobro de obligaciones contenidas en una providencia, conciliación o transacción aprobada por quien ejerza función jurisdiccional, sólo podrán alegarse las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, siempre que se basen en hechos posteriores a la respectiva providencia, la de nulidad por indebida representación o falta de notificación o emplazamiento y la de pérdida de la cosa debida (...)"*.

De los preceptos legales y la jurisprudencia citados se colige que el recurso de reposición formulado por la parte ejecutada contra el mandamiento de pago sólo puede ser interpuesto para controvertir los requisitos formales del título ejecutivo, es decir, los siguientes: (a) que los documentos no son auténticos; (b) que los documentos que integran el título ejecutivo no conforman una unidad jurídica; (c) que los documentos no emanan del deudor o de su causante, ni de una sentencia de condena proferida por el juez o tribunal de cualquier jurisdicción ni de otra providencia judicial que tenga fuerza ejecutiva conforme a la ley; y (d) que los hechos alegados configuran excepciones previas.

Por consiguiente, se puede concluir que el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada deviene improcedente, habida cuenta que las controversias suscitadas por ese medio impugnativo involucran reparos a los requisitos sustanciales y no a las exigencias formales del título ejecutivo, en la medida en que éste no contiene una obligación clara, expresa y exigible, pues alegó que el empleador de la actora no hizo los aportes de todos los factores salariales que le correspondían, que las cifras de los actos administrativos que acataron las sentencias objeto de ejecución no son desproporcionadas y por el contrario garantizan el principio de sostenibilidad financiera del Estado y que la parte actora no solicitó dentro de los tres meses siguientes a la fecha de ejecutoria el cumplimiento de las sentencias por no haber aportado la documentación correspondiente y por lo tanto le es aplicable la sanción prevista en el artículo 192, inciso 5, del CGP (cesación de intereses moratorios); de suerte que a la entidad demandada le incumbía alegar tales reparos a través de las excepciones de mérito, como también lo hizo con la contestación de la demanda (archivo "22ContestacionDemandaUGPP.pdf"), y al juez dirimirlas en la sentencia.

En este orden, no habría lugar a reponer la decisión impugnada, adiada el 30 de marzo de 2022 y, por consiguiente, se proseguirá con el trámite procesal subsiguiente.

En consecuencia, se dispone:

**1. DESESTIMAR** el recurso de reposición interpuesto por la parte ejecutada contra el auto interlocutorio No. 311 del 30 de marzo de 2022, mediante el cual se libró mandamiento de pago en contra de la UGPP y a favor de la ejecutante.

**2. RECONOCER** al Dr. Jorge Fernando Camacho Romero, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.949.833 y titular de la tarjeta profesional de abogado No. 132448 otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado de la UGPP, en los términos y para los fines conferidos en el poder y de acuerdo con los anexos obrantes en el archivo "23AnexoContestacionDemanda" del expediente digital.

NOTIFÍQUESE

**HUMBERTO LÓPEZ NARVÁEZ**  
Juez

AHSC

Firmado Por:  
**Humberto Lopez Narvaez**  
Juez  
Juzgado Administrativo  
027  
Bogotá, D.C. - Bogotá D.C.,

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **46a40781a3ae75a74abcbeaff095b2aa9bc6fe267f7878373b0c0505a254889b**

Documento generado en 16/09/2022 03:43:07 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**